



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INE SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE PRONUNCIARSE SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, numeral 1 y 39, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, numeral 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO PARTICULAR**, respecto del punto 33 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE) celebrada el pasado 27 de febrero de 2023 a las 10:00 horas, consistente en el proyecto de Resolución del Consejo General del INE sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.

Decisión Mayoritaria

En la Resolución aprobada por la mayoría de las y los consejeros electorales del Consejo General del INE se determinó que se actualizaba la *imposibilidad* de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas a los Estatutos del PRI, aprobadas durante la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (en adelante CPN), celebrada el 19 de diciembre de 2022, en virtud del incumplimiento al procedimiento estatutario, trayendo aparejada como consecuencia la invalidez de tales modificaciones.

Por principio de cuentas, para ofrecer un contexto de lo resuelto por la mayoría, estimo necesario mencionar los siguientes antecedentes relevantes:

1. El 19 de diciembre de 2022 se celebró la LXII sesión extraordinaria del CPN, en la cual se aprobaron modificaciones a sus Estatutos.
2. En diversas fechas se presentaron varios escritos de inconformidad contra esa sesión por parte de distintos militantes del partido.
3. El 22 de febrero de 2023, en sesión extraordinaria privada, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó, por mayoría de votos, el anteproyecto



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

de Resolución sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones mencionadas.

En el proyecto sometido a consideración del Consejo General del INE se estableció que, conforme al artículo 16, primer párrafo, de los Estatutos del PRI, quien tiene todas las facultades para modificarlos es la Asamblea Nacional y, aunque el CPN también detenta esa facultad, sólo puede hacerlo en tres supuestos, a saber: a) en casos debidamente justificados, b) derivado de una reforma legal y c) por resolución de autoridades electorales.

De acuerdo con el proyecto aprobado, el partido realizó las modificaciones a sus Estatutos bajo el primer supuesto, esto es, en la hipótesis de *casos debidamente justificados*. Es así que en la Resolución sometida a nuestra consideración se analiza si en los tres momentos fundamentales del proceso estatutario (al emitir la convocatoria al CPN; en el orden del día; y una vez instalado el CPN, dentro del acta de su sesión) se acreditó plenamente y se justificó el caso de excepción.

En el proyecto aprobado por la mayoría se estableció que, dentro del proceso estatutario, el PRI habría señalado que se llevarían a cabo las modificaciones a sus Estatutos por las siguientes razones:

1. Derivado de las recientes modificaciones a diversas leyes en materia electoral, el partido consideró necesario realizar la armonización a la normativa interna, ya que, como instituto político, “el compromiso con el desarrollo democrático del país se encuentra implícito en [sus] principios y valores reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
2. Para el fortalecimiento interno partidista. Al respecto, el partido expresó textualmente lo siguiente: “[...] se debe fortalecer su *cohesión interna* para replantear con eficiencia nuestro papel como Partido, definir la relación entre nuestro instituto y el gobierno, así como el papel del partido en los estados y municipios donde es oposición”.

Al estudiar los argumentos esgrimidos por el PRI, la determinación apoyada por la mayoría fue en el sentido de concluir que el partido incumplió con su deber de **fundar y motivar** su competencia en un caso debidamente justificado, lo cual no se desarrolla en ninguno de los 3 momentos de modificaciones estatutarias mencionados. Se arribó a esa conclusión mayoritaria a partir de los siguientes razonamientos:

Por lo que hace al primer argumento argüido por el partido, esto es, el relativo a la adecuación de su normatividad interna a reformas legales, la decisión tomada por la mayoría



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

del Consejo General del INE fue que haber sesionado para tal fin no se traduce en un caso justificado porque, para ese momento, el proceso legislativo no estaba agotado.

Por lo que hace al segundo argumento, relativo a la cohesión interna, el proyecto no abunda lo suficiente, pues se limita a señalar que “el CPN tenía la obligación de hacer una **motivación reforzada** sobre esta segunda justificación, ya que estos atañen directamente a la vida interna de los derechos de militancia y, por tanto, debía **fundar y motivar fehacientemente** el caso debidamente justificado por el cual se actualizaba el supuesto de excepción”, sin dar mayores argumentos con relación a por qué la motivación no estaba “reforzada”.

Ahora bien, fuera del procedimiento estatutario mencionado, ante requerimientos formulados por la DEPPP, el PRI aportó las siguientes razones adicionales para justificar las modificaciones:

1. Imposibilidad jurídica, temporal, material y financiera para realizar una Asamblea Nacional, pues, de hecho, la próxima sería hasta 2024.

El proyecto no acepta tal justificación porque la explicación del PRI se centra en los casos de sesiones ordinarias, pero nada dice respecto a la posibilidad de haber llevado a cabo sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.

2. Petición expresa de 30 de los integrantes del CPN para llevar a cabo la sesión.

El proyecto no acepta la justificación porque esa cantidad representa sólo el 4.7% de los miembros, cuando la norma exige que lo soliciten más de las 2 terceras partes (aunque, de cualquier forma, el proyecto acepta que el presidente del CEN también puede convocar).

3. Superposición de calendarios electorales en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México.

El proyecto también rechaza el argumento, precisando que el partido pudo haber realizado la sesión antes de los procesos electorales locales 2022-2023 o una vez promulgada la reforma electoral.

Por todo lo anterior, el proyecto aprobado por la mayoría del Consejo General del INE concluye que:

1. Debe declararse la **imposibilidad de pronunciarse** sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones de los estatutos del PRI, en virtud del



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

incumplimiento al procedimiento estatutario respectivo, destacadamente lo relativo al **caso justificado**.

2. Por lo que hace a los agravios presentados por diversos ciudadanos, **no se está en posibilidad de entrar al análisis** de la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones, por lo que se estima que:
 - a) El PRI no cumplió con las disposiciones estatutarias, pues no acreditó el caso justificado.
 - b) Por tal razón, las **modificaciones** a sus estatutos **deben considerarse inválidas**, por lo que no existe materia para atender los agravios.

Motivos de disenso

Respetuosamente me aparto de la decisión aprobada por la mayoría del Consejo General del INE de declarar la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal a las modificaciones a los Estatutos del PRI en virtud, según la mencionada mayoría, del incumplimiento al procedimiento estatutario (ante todo, el no haber acreditado el caso debidamente justificado) y, por ende, declarar la invalidez de tales modificaciones, porque, según mi consideración, ello 1) implica distorsionar la figura relativa al “caso debidamente justificado” y porque 2) se traduce en la suplantación de la militancia por parte del INE en la valoración de aludido caso justificado. En las líneas siguientes desarrollo estas razones de mi disenso.

1. Distorsión de la figura relativa al “caso debidamente justificado”

Como ya mencioné, de acuerdo con el proyecto aprobado, el PRI debió acreditar los extremos previsto en el artículo 16, primer párrafo, de sus Estatutos, el cual, para mayor claridad en mi argumentación, me permito transcribir:

Artículo 16. El Consejo Político Nacional, en **caso debidamente justificado**, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas, podrá reformar o adicionar el Programa de Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Título.

[Énfasis añadido]

Como se puede apreciar, la normatividad interna requiere que se acredite un “caso debidamente justificado”, no obstante, el proyecto le impone al PRI una carga más gravosa, pues, para validarle el procedimiento estatutario, **exige “fundamentación y motivación”**.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Desde mi punto de vista, la categoría empleada en los Estatuto y la exigida por el proyecto no tienen una función jurídica equivalente, de ahí que, a mi modo de ver, el criterio asumido por la mayoría **distorsiona** la categoría contemplada en la normatividad interna del partido y, además, lo hace en perjuicio de éste.

Ello es así porque, al sustituir la figura de “caso debidamente justificado” por la de “fundamentación y motivación” la Resolución aprobada por la mayoría eleva el estándar de exigencia en forma considerable, ya que, desde mi óptica, cuando la normatividad interna del PRI emplea la expresión “caso debidamente justificado” sólo está requiriendo que el partido exprese su razón por la cual pretendió llevar a cabo las modificaciones y, con ese sólo hecho, sin una exigencia mayor, se colma la hipótesis de la normativa interna.

No obstante, para la Resolución aprobada por la mayoría, no basta con que el partido haya invocado la razón que, en ejercicio de su libre determinación, estimó adecuada, sino que exige que, además, “fundamente y motive” su valoración, lo cual implica un estándar de exigencia más elevado en los razonamientos lógico-jurídicos ofrecidos porque, para colmar esta nueva categoría exigida (esto es, “fundamentación y motivación”) no basta con invocar simples razones.

En efecto, la “fundamentación y motivación” es una exigencia que el artículo 16 de la CPEUM hace respecto a los *actos de autoridad*, entendiéndose por la primera, es decir, por la *fundamentación*, que deben expresarse con precisión los preceptos normativos aplicables al caso¹, respecto a lo cual, por cierto, debe mencionarse que el proyecto no explica qué tipo de preceptos deben invocarse, esto es, si constitucionales, legales, reglamentarios o estatutarios.

Con relación a ello, es preciso apuntar que, si bien los partidos deben observar el principio de legalidad, la exigencia extra que hace el proyecto no tiene, desde mi perspectiva, asidero jurídico, pues, precisamente el partido fundamentó su actuación en el artículo 16, el cual no exige —como sí lo hace el proyecto— que la razón que el instituto político pueda ofrecer para estimar que se está ante un caso justificado, deba, a su vez, estar fundamentada en algún otro precepto normativo. El proyecto estaría exigiendo, pues, una doble fundamentación o, mejor dicho (para no confundirlo con el supuesto en donde se fundamenta la actuación en dos preceptos normativos o más), un doble ejercicio de fundamentación.

¹ Véase la tesis [J.]: VI.2o.A. J/248, T.C.C., *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, Núm. 64, abril de 1993, página 43, reg. digital 216534, cuyo rubro es “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Pero no conforme con ello, el proyecto exige, además, una *motivación*, que es la adecuación de los razonamientos lógico-jurídicos a los preceptos ya mencionados en los párrafos previos, lo cual, como he venido sosteniendo, implica un grado de exigencia mayor a la simple justificación. Un ejemplo de esto puede apreciarse en el contenido de la Jurisprudencia 26/2010 del TEPJF², en donde se mandató que la autoridad electoral, indefectiblemente, reflejara en su Resolución una serie de elementos que iban más allá de una simple razón o motivo, pues se exigió que, a fin de cumplir con la debida fundamentación y motivación prevista por el artículo 16 constitucional, el INE “examinar[a] la existencia del derecho cuya tutela se pretend[ía] y [...] ponderar[a] los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar[a] la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de [la] medida”.

Como se ve, todos estos elementos de ponderación, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad hacen de la categoría jurídica de “motivación” un razonamiento más complejo al exigido en el artículo 16 de los Estatutos del PRI. Pero, además, al proyecto no le es suficiente con elevar la categoría jurídica de “caso debidamente justificado” a la de “motivación”, sino que, adicionalmente, eleva aún más un grado el estándar de exigencia al requerir una “*motivación reforzada*”. Por cierto, cuando se exige esta categoría tan elevada se está aceptando, implícitamente, que hubo una motivación, pero que, a pesar de ello, fue insuficiente porque debía haberse robustecido aún más, lo que es una carga que, evidentemente, no está contemplada en la normatividad interna y que, más bien, de acuerdo con mi forma de ver el asunto bajo examen, está imponiendo la mayoría del Consejo General del INE.

Respecto a la motivación reforzada, la SCJN la conceptualiza en la jurisprudencia con rubro MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS³, como “una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a *afectar algún derecho fundamental* u otro *bien relevante* desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso”.

² Jurisprudencia 26/2010, *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, año 3, núm. 7, 2010, pp. 41 y 42, cuyo rubro es “RADIO Y TELEVISIÓN. REQUISITOS PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL COMO MEDIDA CAUTELAR”.

³ Tesis [J.]: P./J. 120/2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1255, reg. digital 165745, cuyo rubro es “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Llama la atención que la “motivación reforzada” suela ser exigida en contextos en donde están implicadas decisiones de suma trascendencia en donde puedan afectarse derechos fundamentales sujetos a protección especial, como podría ser, en el ámbito jurisdiccional, cuando en los sistemas jurídicos que así lo posibilitan, el juez vaya a dictar una sentencia de cadena perpetua.

Si bien, como ya lo he mencionado, los partidos deben sujetarse al principio de legalidad, la consecuencia de la decisión mayoritaria en este punto es que, si en este caso que atañe a la vida interna de los partidos políticos se está exigiendo una motivación reforzada, el Consejo General del INE debería, de ahora en adelante, emitir sus acuerdos y resoluciones también bajo ese estándar, pues los derechos político electorales que suelen estar en juego tienen una posibilidad de afectar (positiva o negativamente) a la mayoría de la población. La conclusión aquí es que, si el mismo Consejo General del INE no se exige a sí mismo “motivaciones reforzadas”, resulta contradictorio que se lo exija a un partido político en un tema que afecta sólo a su vida interna.

Todo lo dicho previamente se refuerza si se acude al contenido de la tesis que lleva por rubro ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS, en donde se precisa que la capacidad autoorganizativa de los partidos políticos no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria la libertad partidista, mediante **limitaciones excesivas**. En esta tesis se hace alusión a que, en ejercicio del control de regularidad electoral de los documentos básicos de los partidos, la autoridad electoral se debe limitar a corroborar un “**mínimo democrático**”, sin que la atribución de verificación se traduzca en la **imposición** de un concreto tipo de organización y **reglamentación**.

Advierto que la mayoría del Consejo General del INE se apartó de la serie de ideas y principios que recoge la tesis citada, pues —alejándose de una postura minimalista ante la autodeterminación de los partidos— **impone un tipo concreto de reglamentación interna**, ya que modifica la adoptada por el PRI en el artículo 16 de sus Estatutos, al distorsionar la categoría prevista en él y exigir una que implica una carga más gravosa. Desde mi punto de vista, la lectura correcta de este precepto estatutario a la luz de la mencionada tesis sería que la autoridad debería limitarse a requerirle al partido un **mínimo argumentativo**, empero, el proyecto adopta una postura intervencionista al no bastarle ese mínimo y requerirle al partido un **máximo argumentativo** a través de una motivación reforzada.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

2. La suplantación de la militancia por parte del INE en la valoración del caso justificado

Una segunda razón para apartarme del criterio mayoritario es que, desde mi óptica, a la Resolución aprobada no le bastó con exigir una categoría no contemplada en la normatividad interna —esto es, la fundamentación y motivación reforzada—, sino que, además, suplantó la potestad que, en el despliegue de su libre determinación, el partido tiene para valorar por sí mismo el caso debidamente justificado.

En efecto, es mi convicción que basta con que el partido haya expuesto las razones que, *para él y sus miembros*, hayan justificado que el CPN modificara los estatutos, para que esta autoridad tenga por cumplida la normatividad interna, sin que ésta pueda suplantar la potestad gregaria, so pena de vulnerar el autogobierno partidista.

Ello es así, atendiendo al artículo 5, párrafo 2, de la LGPP, que textualmente establece:

Artículo 5

[...]

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su **libertad de decisión interna**, el derecho a la **auto organización** de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.

Como la decisión de haber modificado los Estatutos a través de una sesión del CPN, así como las inconformidades que se presentaron en contra de ello, es un asunto que atañe a la vida interna del partido, estimo que la labor de la autoridad electoral debe limitarse a revisar que se haya cumplido con el artículo 16 de los Estatutos, esto es, a que se haya invocado una justificación para proceder en tal sentido, dejando a esa vida interna del partido la valoración de la justificación expresada, de modo que imponer, desde afuera de la vida intrapartidaria —esto es, desde la autoridad electoral—, estándares de justificación, implicaría romper con esos principios.

El yerro en el que incurre el proyecto, entonces, es que, además de exigir una fundamentación y motivación reforzada en los términos precisados en el apartado previo, hace nugatoria la libertad gregaria del partido, pues **el INE proceda a valorar, una por una, cada justificación expresada por el PRI**, lo que, de suyo, implica ya una invasión en su libre autoorganización, pero, además, tal invasión se agrava porque el estándar de exigencia que impuso fue tan estricto que ninguna de las varias justificaciones expresadas por el partido aprobó los filtros impuestos.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

En ese sentido, no puedo acompañar el proceder de la mayoría del Consejo General del INE porque, de hecho, es análogo al llevado a cabo de forma incorrecta por la Sala Regional Xalapa en la sentencia SX-JDC-999/2012 y que, tan incorrecto fue, que a la postre la Sala Superior del TEPJF lo **revocó**. En el caso que traigo a colación, el PAN había determinado, en ejercicio de su libre auto organización, que el criterio interno para determinar el orden de prelación en la designación de las candidaturas de dos fórmulas al Senado de la República sería el del mejor perfil y, no obstante ello, al llegar al conocimiento de la Sala Regional Xalapa, ésta revocó el orden que el partido, a partir de la dimensión del principio de autodeterminación, había definido y, no conforme con ello, la Sala Regional mencionada entró a valorar cuál era, *para ella*, el mejor perfil, señalando incluso que el seleccionado por ella “se ajusta[ba] a los fines, principios y valores del [PAN]”.

Este caso es un claro ejemplo de lo que, desde mi punto de vista y del de la Sala Superior, no debe hacerse con la vida interna de los partidos, pues implica claramente una invasión en ésta, ya que la autoridad (en ese caso, jurisdiccional) trató de decidir por el partido qué era lo que más le convenía a él.

Las razones que llevaron a la Sala Superior (en el SUP-REC-35/2012) a revocar esa determinación de la Sala Regional Xalapa fueron, precisamente, las relativa a la vulneración al principio de autoorganización, pues resolvió que aquella debió considerar que el orden de prelación era una decisión tomada por el partido acorde con su estrategia e ideología política conveniente de conformidad con su libre autodeterminación y, por tal razón, ***la autoridad jurisdiccional debió respetar la decisión tomada por el partido*** en el seno de su vida interna.

Así pues, es mi convicción que la mayoría del Consejo General del INE debió tomar en cuenta este precedente, porque se presenta una situación que está siendo replicada también en el caso objeto de este voto particular y, por ende, se está ante otro claro ejemplo de invasión a la vida interna de los partidos, ya que ***la autoridad electoral está decidiendo por el partido qué es lo que debe entenderse por un caso justificado*** y, al igual que en el precedente citado, procede a examinar uno por uno, en una especie de “plenitud de jurisdicción”, los elementos que el PRI tenía de frente para poder determinar la justificación, realizando un ejercicio de ponderación más allá al efectuado conforme a la autodeterminación de éste.

El problema que yo veo es que, como no existen parámetros normativos objetivos (como podrían ser hipótesis taxativas) para valorar la justificación, quien determina si la misma está acredita lo hace de acuerdo con valoraciones marcadamente relativas y lo que no se explica es porqué, ante un tema de vida interna del partido, la subjetividad (léase “criterio”) del Consejo General debe privar sobre la subjetividad del partido.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR

CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

En suma, como en el caso concreto el partido sí expuso los argumentos para sostener que la justificación sí se presentaba, mi postura es que debió concluirse que ***sí se atendió al procedimiento estatutario*** por lo que hace a la hipótesis del caso justificado.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente **VOTO PARTICULAR.**

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

